

Movimientos sociales, Gobiernos, y nuevos escenarios de conflicto en América Latina¹

Maristella Svampa²

En el presente artículo nos proponemos indagar algunas de las tendencias que marcan el actual paisaje socio-político latinoamericano, sobre todo en lo que compete a la relación entre movimientos sociales, matrices político-ideológicas y gobiernos. Para ello, en primer lugar, presentaremos un examen del cambio de época que caracteriza a la región, en un análisis que apunta a subrayar el carácter ambivalente de la actual transición latinoamericana. En segundo lugar, proponemos una aproximación analítica a las diferentes tradiciones o matrices político-ideológicas que atraviesan el espacio militante contestatario. Por último, haremos un recorrido por algunos de los datos más relevantes que presenta la región, a través del análisis de cuatro tendencias: en primer lugar, el avance de las luchas indígenas, en segundo lugar, la consolidación de nuevas figuras de la militancia; en tercer lugar, la actualización de lo nacional-popular; por último, el retorno de una fuerte narrativa desarrollista, en clave extractivista, asociada tanto a gobiernos progresistas y de izquierda como aquellos de carácter más conservador y neoliberal.

El cambio de época

Desde hace una década, América Latina viene experimentando un cambio de época. Diversos procesos sociales y políticos han ido configurando nuevos escenarios: la crisis y cuestionamiento del consenso neoliberal, la relegitimación de los discursos críticos, la potenciación de diferentes movimientos sociales, en fin, la emergencia de gobiernos autodenominados “progresistas” y de centroizquierda, que valorizan la construcción de un espacio latinoamericano y el retorno del rol del Estado, son algunas de las notas distintivas de una etapa de transición que parece contraponerse a todas luces con el período anterior,

¹ Publicado inicialmente en la revista *Problèmes d'Amérique Latine* (2009) y en *OneWorld Perspectives, Working Papers 01/2010*, Universitat Kassel, www.social-globalization.uni-kassel.de/owp.php, bajo el título de “Movimientos sociales, matrices socio-políticas y nuevos escenarios en América Latina”. El mismo ha sido revisado y actualizado para su publicación en este libro.

² Investigadora independiente del Conicet (Centro Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas), Profesora de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Coordinadora del Programa de Estudios Críticos del Desarrollo, proyecto financiado por el FONCYT.

la década de los '90, marcados por la sumisión de la política al Consenso de Washington, en nombre de una globalización unívoca e irresistible.

En principio, este cambio de época habilita el retorno de ciertos términos que habían sido expulsados del lenguaje político y de las academias, tales como “anti-imperialismo”, “descolonización”, o “emancipación”, así como de nuevos vocablos tales como “Estado Plurinacional” y “Buen Vivir”. Asimismo, este cambio de época ha permitido abrir un espacio desde el cual releer la relación entre modelos académicos y compromiso político, algo que también parecía definitivamente clausurado en pos de la hiperprofesionalización del saber académico, del repliegue del intelectual-intérprete o de la apología del modelo del experto. Nuevos desafíos aguardan, en especial, a las jóvenes generaciones de investigadores, que hoy comienzan a cuestionar los modelos académicos dominantes, y advierten la posibilidad de una articulación diferente entre saber académico y compromiso con las nuevas realidades emergentes y, en especial, con los movimientos sociales. Por último, este cambio de época estimula la posibilidad de pensar creativamente las articulaciones entre Estado y sociedad, entre democracia representativa y democracia directa y participativa, entre lo institucional y lo no-institucional, entre el espacio público estatal y el espacio público no-estatal, entre otros.

No constituye un dato menor recordar que la apertura del nuevo ciclo de luchas contra la globalización neoliberal y asimétrica no provino de las fuerzas encuadradas en la política institucional. Este se abrió en 1994 con la irrupción del zapatismo, en Chiapas. El zapatismo, como es reconocido, fue el primer movimiento contra la globalización neoliberal, interpeló fuertemente a las izquierdas entonces existentes e influyó en los grupos y colectivos alterglobalización que se estaban gestando tanto en Europa como en Estados Unidos. Sin embargo, en rigor, en América Latina, el nuevo ciclo de acción colectiva, que señala una progresiva acumulación de las luchas contra las reformas neoliberales, arranca en el año 2000, con la Guerra del Agua, en Cochabamba, y tuvo sus momentos de inflexión tanto en Argentina, en diciembre de 2001, Ecuador, en 2005, nuevamente Bolivia en 2003 y 2006, entre otros hitos. Fueron entonces las organizaciones y movimientos sociales los grandes protagonistas de este nuevo ciclo, los que a través de sus luchas y reivindicaciones, aun de la práctica insurreccional, lograron abrir la agenda pública y colocar en ella nuevas problemáticas, contribuyendo con ello a legitimar otras formas de pensar la política y las relaciones sociales: la crisis de representación de los sistemas vigentes, el reclamo frente a la conculcación de los derechos más elementales, la defensa de los recursos naturales, prontamente tematizados como bienes comunes, las autonomías indígenas.

Así, en las últimas décadas, los movimientos sociales en América Latina se han multiplicado y han extendido su capacidad de representación, ampliando su plataforma discursiva y representativa en relación con la sociedad: movimientos indígenas y campesinos, movimientos urbanos territoriales, movimientos socio-ambientales, movimientos y colectivos glttb, en fin, colectivos culturales, dan cuenta de la presencia de un conjunto de reivindicaciones diferentes, con sus respectivos clivajes identitarios, configurando un campo multiorganizacional extremadamente complejo en sus posibilidades de articulación. Heterogéneos en sus demandas, al igual que en otras latitudes, los movimientos sociales nos transmiten una tendencia a la reafirmación de la diferencia y el llamado al reconocimiento. Sin embargo, no es menos cierto que en América Latina, en los últimos tiempos, una de las problemáticas centrales y potencialmente unificadora es aquella de la tierra y del territorio.

Asimismo, es importante destacar la configuración de un “*nuevo internacionalismo*”,³ que ha venido asomando en la arena mundial, de la mano de los movimientos sociales. En América Latina, esto conllevó la creación de nuevos espacios de coordinación, signados particularmente por la evolución de los llamados acuerdos sobre liberalización comercial y especialmente frente a la iniciativa norteamericana de subsumir a los países de la región bajo un Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). De manera más reciente, las resistencias locales y regionales contra el IIRSA (Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana) y el Plan Puebla-Panamá, contra los avances de lo que genéricamente se ha denominado extractivismo,⁴ ha venido desembocando en la constitución de espacios de coordinación a nivel regional, centrados en la defensa de la tierra y el territorio.

³ La expresión proviene del título del libro de D.Bensaid (*Le nouvel internationalisme*, 2003) y fue retomada por J. Seoane, E. Taddei y C. Algranati, en “Movimientos sociales y neoliberalismo en América Latina”; en *Enciclopédia Contemporânea da América Latina*, Compiladores Emir Sader, Ivana Jinkings, Carlos Eduardo Martins y Rodrigo Nobile, Brasil, Boitempo, 2006

⁴ Por extractivismo entendemos aquel patrón de acumulación basado en la sobre-explotación de recursos naturales, en gran parte, no renovables, así como en la expansión de las fronteras hacia territorios antes considerados como “improductivos”. Por ende, no contempla solamente actividades típicamente extractivas (minería y petróleo), sino también otras actividades (como el agronegocios o los biocombustibles), que abonan una lógica extractivista a través de la tendencia a la consolidación de un modelo monoprodutor. Asimismo, comprende también aquellos proyectos de infraestructura previstos por el IIRSA, en materia de transporte (hidrovías, puertos, corredores biocénicos, entre otros), energía (grandes represas hidroeléctricas) y comunicaciones, programa consensuado por varios gobiernos latinoamericanos en el año 2000, cuyo objetivo central es el de facilitar la extracción y exportación de dichos productos hacia sus puertos de destino. Véase Gudynas (2009) y Svampa (2011)

En términos geopolíticos, la opción “extractivista” que hoy busca implantarse en la región latinoamericana, desde México a la Argentina, responde a una nueva división territorial y global del trabajo, basado en la apropiación irresponsable de los recursos naturales no renovables, lo cual ha dado lugar a nuevas asimetrías económicas, políticas y ambientales entre el norte y el sur. Esta desigual división del trabajo, que repercute en la distribución de los conflictos territoriales y ambientales, perjudica sobre todo a aquellos sectores sociales, que presentan una mayor vulnerabilidad. Un ejemplo de ello es la situación de los pueblos indígenas y campesinos, que pujan por la defensa de sus derechos culturales y territoriales, reconocidos formalmente por gran parte de las constituciones latinoamericanas, ante el avance de la frontera forestal, la megaminería transnacional, las grandes represas, la privatización de las tierras o el boom de la soja transgénica. En términos de D. Harvey (2004), la actual etapa de expansión del capital puede ser caracterizada como de “acumulación por desposesión”,⁵ proceso que ha producido nuevos giros y desplazamientos, colocando en el centro de disputa la cuestión del territorio y el medio-ambiente.

No es casualidad, entonces, que en este escenario donde se observa una tendencia a la reprimarización de la economía, caracterizado por la presencia desmesurada de grandes empresas transnacionales, se hayan potenciado las luchas ancestrales por la tierra, de la mano de los movimientos indígenas y campesinos, al tiempo que han surgido nuevas formas de movilización y participación ciudadana, centradas en la defensa de los bienes comunes, la biodiversidad y el medio ambiente; todo lo cual va diseñando una nueva cartografía de las resistencias, al tiempo que coloca en el centro de la agenda política la disputa por lo que se entiende como “modelos de desarrollo”.

Tengamos en cuenta que desde fines de los 80, *el territorio* se fue erigiendo en el lugar privilegiado de disputa, a partir de la implementación de las nuevas políticas sociales, de carácter focalizado, diseñadas desde el poder con vistas al control y la contención de la pobreza. Esta dimensión material y simbólica, muchas veces comprendida como *autoorganización comunitaria*, aparece como uno de los rasgos constitutivos de los movimientos sociales en América Latina, tanto de los movimientos campesinos, muchos de ellos de corte étnico, como de los movimientos urbanos, que asocian su lucha a la defensa de la tierra y/o a la satisfacción de las necesidades básicas.

⁵Para Harvey (:2004), el actual modelo de acumulación implica cada vez más la mercantilización y la depredación, entre otras cosas, de los bienes ambientales. La acumulación por desposesión o despojo (lo que Marx denominaba la “acumulación originaria”) ha desplazado en centralidad la dinámica ligada a la “reproducción ampliada del capital”.

Sin embargo, de manera más reciente, a partir de las nuevas modalidades que ha adoptado la lógica de acumulación del capital, asistimos a una nueva inflexión a partir de la cual el territorio, en un sentido más amplio, esto es, concebido doblemente como habitat y comunidad de vida, aparece en el centro de los reclamos de las movilizaciones y movimientos campesinos, indígenas y socioambientales. Las acciones de dichos movimientos, orientadas tanto contra el Estado como contra sectores privados (grandes empresas transnacionales), generalmente se inician con reclamos puntuales, aunque en la misma dinámica de lucha tienden a ampliar y radicalizar su plataforma representativa y discursiva, incorporando otros temas, tales como el cuestionamiento a un modelo de desarrollo monocultural y destructivo, y la exigencia de desmercantilización de los llamados “bienes comunes”. En dicho proceso, la construcción de la *territorialidad* se va cargando de nuevas (re)significaciones y diferentes valoraciones, en contraste con las concepciones generalmente excluyentes, de corte desarrollista o ecoeficientistas, que motorizan tanto los gobiernos como las empresas transnacionales.⁶

En suma, lejos de la pura linealidad, este cambio de época que señala la desnaturalización de la asociación entre globalización y neoliberalismo establecida durante los '90, instala a los países latinoamericanos en un espacio de geometría variable donde se entrecruzan diferentes tendencias, que van señalando la emergencia de nuevas tensiones y contradicciones, independientemente del carácter o signo político-ideológico de los gobiernos.

Matrices políticos-ideológicas: una aproximación a las tipologías y modelos de militancia

Si partimos del hecho de que los movimientos sociales son heterogéneos en sus demandas y, al mismo tiempo, poseen una potencialidad antagónica, una de las preguntas y debates centrales se vincula con la posibilidad de articulación de las luchas, lo cual no depende solamente de la potencialidad unificadora de ciertos temas y marcos de acción, sino también de los vínculos que se entretajan entre las diversas tradiciones político-ideológicas presentes en el campo militante contestatario. Es por ello que, en el presente apartado, proponemos llevar a cabo una presentación que pone el acento en las diferentes

⁶En la medida en que la construcción de la territorialidad aparece como una dimensión constitutiva de los diferentes movimientos sociales latinoamericanos, éstos pueden denominarse *movimientos socio-territoriales*. Esta caracterización de los actuales movimientos sociales latinoamericanos como movimientos socio-territoriales, coincide con la visión de otros colegas del espacio crítico latinoamericano; como por ejemplo, C. Porto Goncalvez y Bernardo Mancano, en Brasil.

matrices socio-políticas, encaminado a reflexionar acerca de los rasgos tendenciales centrales que advertimos en el actual escenario.

Desde nuestra perspectiva, el campo contestatario se despliega en cuatro matrices político-ideológicas diferentes: la indígena comunitaria, la nacional-popular, la izquierda clasista tradicional y, de manera más reciente, la “nueva” narrativa autonomista. Por matrices político-ideológicas entendemos aquellas líneas directrices que organizan el modo de pensar la política y el poder, así como la concepción acerca del cambio social. Si bien cada matriz político-ideológica posee una configuración determinada, los diferentes contextos nacionales así como las tensiones internas las van dotando, para cada caso, de un dinamismo y una historicidad particular. En otras palabras, las matrices político-ideológicas no se encuentran en estado puro, pues las diferentes dinámicas políticas han dado paso a diversos entrecruzamientos y conjunciones (entre indianismo y marxismo, entre indianismo y matriz nacional-popular, entre indianismo y narrativa autonómica, entre marxismo y autonomismo, por dar algunos ejemplos), como también a un proceso de conflicto y colisión, que puede llevar a acentuar las diferencias en términos de concepciones, modos de pensar y hacer la política. Esta propuesta, de orden analítico, tiene por objeto dar cuenta de aquellos elementos más dinámicos y organizadores presentes en las diferentes configuraciones político-ideológicas que hoy recorren el escenario político latinoamericano.

De modo esquemático y provisorio, procederemos a definir los elementos centrales que configuran cada matriz. Así, podemos afirmar que la matriz indígena se inserta en el marco de la “memoria larga” de los pueblos indígenas, coloca en el centro la idea de resistencia, derechos colectivos y poder comunal; y su dinámica política se inscribe permanentemente en la tensión entre un proyecto de recreación de las autonomías indígenas y el proyecto identitario de refundación o vuelta a las comunidades prehispánicas. Por su parte, la matriz nacional-popular se asocia a la “memoria mediana” (las experiencias populistas de los años 30 40 y 50), y tiende a sostenerse sobre el triple eje de la afirmación de la nación, el estado redistributivo y conciliador, el liderazgo carismático y las masas organizadas –el pueblo-. Su dinámica suele instalarse en la tensión entre un proyecto nacionalista revolucionario, conducido por los sectores subalternos (la figura del pueblo) junto a un líder o una dirigencia política, y el proyecto de la participación controlada, bajo la clara dirección del líder y el tutelaje estatal.

De igual modo, la matriz propia de la izquierda clasista, se instala en el marco de la memoria mediana, y se nutre de las diferentes variantes del marxismo partidario, entre las cuales se destaca la superioridad de la forma partido, y una determinada concepción del

poder (y, por ende del cambio social) ligada a la idea antagonismo de clases y la construcción del socialismo. Su dinámica suele instalarse en la tensión/articulación entre la vía revolucionaria (la lógica de la toma del poder) y la vía reformista institucional (la lógica electoral).

Respecto de la nueva narrativa autonomista, más bien instalada en el marco de la “memoria corta”, los elementos centrales que configuran su matriz son la afirmación de la autonomía, la horizontalidad y la democracia por consenso. En este caso particular, hablamos de una “narrativa” autonomista porque ésta se construye como un relato identitario,⁷ de producción del sujeto, en el cual cuenta la experiencia personal de los actores (antes que una inscripción en la comunidad, el pueblo o la clase social). Por otro lado, históricamente es una narrativa que se nutre del fracaso general de las izquierdas tradicionales (por ello cobra relevancia la definición por oposición respecto de otras tradiciones de izquierda, principalmente la izquierda clasista), así como de los procesos de desinstitucionalización de las sociedades contemporáneas.

Esta nueva narrativa ha ido configurando un ethos común que afirma como imperativo la desburocratización y democratización de las organizaciones y se alimenta, por ende, de una gran desconfianza respecto de las estructuras partidarias y sindicales, así como de toda instancia articuladora superior. En términos generales, la autonomía aparece no sólo como un eje organizativo, sino también como un planteo estratégico, que remite a la “autodeterminación” (en el sentido de Castoriadis, “dotarse de su propia ley”). Por ello, su dinámica tiende a desplegarse en la tensión inscripta entre la afirmación de un ethos colectivo libertario (la autonomía como horizonte utópico) y el repliegue diferencialista-identitario (la autonomía como valor refugio).

Este ethos común ha dado lugar a nuevos modelos de militancia, entre los cuales se destacan, en primer lugar, la figura “local” del *militante territorial*, verdadera columna vertebral de los grandes movimientos sociales de América Latina, vinculados a la acentuación del proceso de empobrecimiento y territorialización de los sectores populares. Este proceso fue colocando en el centro de la nueva política local la figura del mediador, a través del “militante social” o “territorial”, heredero de los movimientos sociales urbanos de otras épocas. En segundo lugar, se destaca la figura del militante o *activista cultural*, difundida tanto en los países del centro como en la periferia, cuya modalidad de construcción

⁷ La categoría de narrativa ha sido definida por Koselleck (1993), como la dimensión específicamente temporal mediante la cual los actores asignan sentidos a la vida, individual y colectiva, eslabonando el tiempo como hilo articulador de la narración.

organizativa son los grupos de afinidad, a través de colectivos, que suelen adoptar una dimensión a la vez política y cultural. En este sentido, en tanto “movimientos de experiencia” (Mc Donald, 2003), donde la acción directa y lo público aparecen como un lugar de construcción de la identidad, no resulta extraño que gran parte de estos grupos se agoten en la dimensión cultural-expresiva y no alcancen una dimensión política. Sin embargo, en otros casos, sobre todo allí donde la acción de los movimientos sociales es relevante en términos políticos, los colectivos culturales deliberadamente buscan una mayor articulación con aquellos, constituyéndose en creadores de nuevos sentidos políticos y culturales, o bien, asumiendo el rol de reproductores de los acontecimientos en un contexto de intensificación de las luchas sociales. Esta forma de militancia expresa así una vocación nómada por el cruce social y la multipertenencia, en el marco del desarrollo de relaciones de afinidad y redes de solidaridad con otras organizaciones. Su expansión, tanto en el ámbito de la comunicación alternativa, la intervención artística y la educación popular, constituye una de las características más emblemáticas de las nuevas movilizaciones sociales. En este sentido y contrariamente a lo que se piensa, el activista cultural está lejos de ser un actor de reparto, erigiéndose más bien en uno de los protagonistas centrales de las luchas antineoliberales actuales. En fin, en un ámbito donde la volatilidad y la tendencia al repliegue son la regla, el nuevo activismo cultural, ya cuenta en América Latina con una rica e interesante historia.

En lo que sigue, procederemos a preguntarnos cuáles son los datos más novedosos que marcan el actual paisaje latinoamericano y en qué medida estas tendencias ponen de manifiesto el modo en cómo dichas matrices convergen, se entrelazan o articulan, cooperan o colisionan en el marco de diferentes dinámicas políticas nacionales. Nuestro análisis se detendrá principalmente en Argentina, Bolivia y México, aunque en ciertos casos haremos referencia a otros países, tales como Perú y Ecuador.

El avance de las luchas indígenas y los proyectos en curso

Como afirma H.Díaz Polanco (2008), quien dice autonomía para aludir a los procesos de lucha indígena, está aludiendo tanto al reconocimiento de los derechos colectivos (culturales y territoriales), así como a la autodeterminación, concepto cuyo contenido es decididamente político. Así, en primer lugar, uno de los datos mayores del

actual escenario latinoamericano es el avance de las luchas y conquistas de las autonomías indígenas, lo cual incluye escenarios políticamente tan contrastantes como Bolivia, México y Perú. En este sentido, el nuevo despertar político de los pueblos indígenas se instala tanto en el terreno de la memoria larga, como en el de la memoria corta de las luchas: en efecto, la relegitimación de la matriz comunitaria ha tenido como telón de fondo el avance de la globalización neoliberal, expresado en la actualidad a través de la expansión de las fronteras del capital hacia los territorios antes considerados como improductivos. Dichos antagonismos han ido configurando respuestas diferentes que, por encima de las tensiones existentes colocan en el centro la temática de la autonomía y los derechos colectivos de los pueblos indígenas, y en algunos casos, la refundación de la nación a través de la creación de Estados plurinacionales y el reconocimiento de una “legalidad originaria”⁸, por la vía de Asambleas Constituyentes y reformas constitucionales. Uno de los temas fundamentales es el reconocimiento del derecho de consulta previa a los pueblos originarios, tal como lo postula el convenio 169 de la OIT (1989) recogida por casi todas las constituciones latinoamericanas y la Declaración de las Naciones Unidas (2007). Dicho tema deviene central, en la medida en que las nuevas modalidades de dominación colisionan de lleno con los modos de vida de las poblaciones originarias y campesinas, y amenazan en su conjunto la preservación de los recursos básicos para la vida (tierra y territorio).

En primer lugar, un escenario en el cual la defensa de la autonomía indígena se ha manifestado a través de la formulación de un proyecto político integral, es Bolivia. Su expresión más acabada fue sin duda El *Pacto de Unidad*, que integraron diversas organizaciones indígenas y campesinas vinculadas al MAS, un documento preparado especialmente para la Asamblea Constituyente que proponía la creación de un Estado comunitario y plurinacional. Elaborado y publicado en septiembre de 2006, es una prueba elocuente de la apuesta realizada por importantes organizaciones sociales, de carácter indígena y rural, respecto de los objetivos refundacionales que originariamente planteaba la Asamblea Constituyente.⁹

⁸ Retomamos la expresión de Fuentes Morúa: 2006.

⁹Las organizaciones eran las siguientes: Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia – CIDOB; Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia – CSCB; Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia, “Bartolina Sisa” - FNMCB-BS; Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu – CONAMAQ; Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz – CPESC; Movimiento Sin Tierra de Bolivia – MST; Asamblea del Pueblo Guaraní – APG; Confederación de Pueblos Étnicos Moxeños de Beni – CPEMB

Sin embargo, en Bolivia el desafío por crear un Estado plurinacional y afirmar el proceso de creación de las autonomías indígenas-campesinas, se entrecruzó con varias dificultades, que recorrieron el primer mandato de Evo Morales (2006-2010). Por un lado, la exigencia, de parte del nuevo gobierno, de (re)construir el Estado nacional, a través de una estrategia de nacionalización y el desarrollo de fuertes mecanismos de regulación, cuyo objetivo fue el de lograr el control de la economía, el territorio y los recursos naturales. Por otro lado, la propia demanda de autonomía indígena se insertó en una dinámica de polarización social y regional, y encontró su contracara en las demandas autonómicas y separatistas del Oriente, ese “otro país”, el de la media luna boliviana, que incluía Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando. Esta reapropiación que hicieron las élites regionales de la demanda de autonomía, desembocaron en un proceso de tensión y de negociación que fueron marcando los avatares de la Asamblea Constituyente, así como la realización de varios referéndum (entre ellos, el de la aprobación de los estatutos autonómicos de Santa Cruz; no reconocidos por el Estado Nacional, y el referéndum revocatorio, que reafirmó el liderazgo presidencial).

En un contexto de “empate catastrófico” (al decir del vicepresidente Alvaro García Linares), la nueva Constitución Política, obtuvo una primera sanción en Oruro, en diciembre de 2007, la cual recogió gran parte de lo expresado en el Pacto de Unidad, aunque varias definiciones quedaron en la nebulosa, como la elección de una Asamblea Legislativa Plurinacional, que tendría a su cargo la discusión sobre las autonomías, y la cuestión de cómo se saldarían los conflictos entre la justicia comunitaria y la justicia ordinaria. Sin embargo, las “correcciones” aportadas en octubre de 2008, en el marco de una negociación parlamentaria con la oposición, introdujeron varias modificaciones (un centenar), que afectaron el alcance de la reforma agraria, de la justicia comunitaria y el llamado control social, entre otros. Lo que resulta claro es que, en octubre de 2008, la crisis boliviana (y la salida pactada) se resolvió en favor del fortalecimiento del Estado nacional, antes que del Estado plurinacional. Pese a las concesiones, según P. Stefanoni “la nueva Carta Magna tiene todo lo que Evo Morales necesita para construir su proyecto de poder: reelección, mayores espacios para la intervención del Estado en la economía y ciertos insumos para una descolonización entendida como igualdad” (*Le Monde Diplomatique*, Bolivia, Noviembre de 2008).

En realidad, aún reconociendo tanto la fuerza como las debilidades del proyecto autonómico de las organizaciones indígenas y rurales, necesario es decir que éste estaba lejos de presentarse en estado puro. Antes bien, aunque diferenciada, la matriz

comunitarista parecía articulada y combinada con la matriz nacional popular, de la cual Evo Morales aparece como su más clara encarnación. Además, existe la tensión- corrientemente subestimada e incluso invisibilizada- con las identidades campesinistas construidas bajo el nacionalismo revolucionario de los años 40 y 50¹⁰. El hecho de que en la nueva Constitución se hable de la “cosmovisión” *campesina-indígena*, buscaba resolver esta tensión entre una identidad clasista y otra que se postula –al menos en su forma indigenista- como visión del mundo alternativa y descolonizadora respecto del “modelo de civilización occidental”, que responde al legado colonial. Los sindicatos cocaleros de donde surge a la política Evo Morales son en gran medida herederos de estas tradiciones, junto con ciertas inercias y reinenciones de lógicas protocomunitarias que perviven bajo la *forma del sindicato rural*.

Luego de la derrota de las oligarquías regionales (2008), que supuso el final de la situación de empate catastrófico, el panorama cambió ostensiblemente. En este sentido, el segundo mandato de Evo Morales, iniciado en 2010, ha venido reflejando la consolidación de una nueva estatalidad, bajo la creciente hegemonía del MAS (Movimiento al Socialismo), en detrimento de la consolidación del Estado Plurinacional. Esto ha venido expresándose a través de la sanción de varias leyes estratégicas que tienden a limitar la autonomía territorial de los territorios indígenas.¹¹

Por su parte, en un escenario políticamente muy diferente, como el de México, la demanda de autonomía expresó, desde el comienzo, el núcleo central del proyecto zapatista, ilustrado primero por los municipios autónomos y luego por la creación de Juntas del Buen Gobierno, a partir de 2003, en una dinámica que suele ser leída también como el proceso de fundación de instituciones propias. Estas instituciones, que se encuentran por fuera de la estatalidad, son una expresión de la consolidación del avance de las comunidades autónomas y autogestionadas en lo político y económico, encargadas de proveer educación, salud, vivienda y alimentación, entre otros. Cuán desarrolladas están

¹⁰ Gordillo, M. José, 2000.

¹¹ En esta línea se inscriben: la ley marco de autonomía (que deniega la autonomía a aquellos territorios indígenas que se encuentran entre dos o más departamentos, ya que ello obligaría a redefinir los límites entre éstos últimos; asimismo establece que el estatuto de las autonomías indígenas sea aprobado vía referéndum y no por usos y costumbres, como pedía CIDOB); la ley de régimen electoral (que limita la representación de los pueblos originarios a 7, en lugar de los 18 escaños que exigían conjuntamente CIDOB y CONAMAQ); por último, la Ley de la Pachamama, que incluye el derecho de consulta, con carácter vinculante, y que hasta ahora solo ha tenido un tratamiento parcial por parte del Parlamento.

estas comunidades, cuán autónomas son (en lo económico, educativo y social, por ejemplo), cuántos avances han realizado en términos de pasaje de una “comunidad de resistencia” a una “comunidad proyecto”, es algo difícil de dirimir. Especialistas como G.López y Rivas (:2004) en la cuestión de las autonomías indígenas sostienen que los zapatistas han profundizado “las formas de una democracia basada en organizaciones abiertas, horizontales e incluyentes: gobernar como servicio, mandar obedeciendo, revocación del mandato, autogestión y autorganización del poder social, representar y no suplantar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, construir y no destruir”. Otros ensayos que exploran el tema reconocen la dificultad que hoy atraviesa el EZLN, debido al endurecimiento del escenario represivo en México, y la instalación, desde la llegada de Calderón de un cerco militar que ha golpeado a las bases zapatistas (Modonesi:2008). Asimismo, aún los más críticos destacan que la mayor participación de los jóvenes y de las mujeres en la educación de los niños y el cuidado de los ancianos implica avances tanto en el campo de las relaciones de género como en las relaciones intergeneracionales, pero niegan que “las regiones zapatistas sean realmente autónomas” y que exista un proyecto político de construcción de la autonomía. Esta sería más bien de carácter “empírico” (Almeyra: 2008). Por último, no son pocos los que subrayan el fracaso de *La Otra Campaña*, lanzada por el zapatismo en 2005 y encabezada por Marcos, con la idea de unir la lucha indígena con otros sectores, y que instaló al zapatismo en un campo multiorganizacional complejo, de abierta confrontación con la “democracia dirigista” (ilustrada por un liderazgo nacional-popular como el de López Obrador), y con la izquierda clasista más tradicional.

Sin embargo, por fuera del zapatismo, la construcción de una *autonomía de hecho* no es un tema menor, muy especialmente si hacemos referencia a otras experiencias mexicanas. Recordemos que la autonomía remite tanto a la autodeterminación, como al reconocimiento de los derechos colectivos, a la vez culturales y territoriales. En realidad, sucedió que el zapatismo, principalmente a través de los acuerdos de San Andrés (1995-1996), abrió una gran oportunidad política para la discusión de las autonomías y el reconocimiento de los derechos culturales, en la cual participaron numerosas organizaciones indígenas e intelectuales especialistas en el tema. La disputa por el sentido de la autonomía indígena, entendida como “el núcleo socio-político del proyecto indígena” (G.López Rivas: 2004), se insertó pues en un campo pluriorganizacional, en el cual confluían organizaciones y pueblos indígenas. Los acuerdos de San Andrés reconocían el derecho de los pueblos a su autonomía en el marco del Estado mexicano, sin embargo, los

mismos fueron incumplidos, al distorsionarse la iniciativa de reforma constitucional impulsada por la Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación), votada posteriormente por el Parlamento, con la complicidad de los partidos mayoritarios.

En 2001, volvió a abrirse la oportunidad de retomar los acuerdos de San Andrés -ya no bajo el gobierno del PRI sino del PAN-, a través de la propuesta de reforma de la constitución, aunque nuevamente esta posibilidad se vería frustrada. No obstante ello, lo notorio ha sido, como afirma López Barcenas (2006), que “los pueblos indígenas fueron más allá”: primero, interpusieron 330 controversias constitucionales, demandando la nulidad del proceso legislativo, lo cual fue rechazado por la Corte Suprema de Justicia. En segundo lugar, dado el fracaso de la vía institucional, éstos llamaron “a construir las autonomías de hecho”. Así, en la medida en que el Estado cerró la puerta al reconocimiento de las autonomías indígenas, la respuesta, lejos de ser la resignación o la violencia, fue la de buscar concretar aquello que el gobierno les negaba. “En esa situación, mas que ponerse a discutir sobre el problema, las comunidades indígenas avanzaron y en el camino resolvieron alguno de los problemas que aparentemente no tenían solución, con lo cual nos aportaron una experiencia cuyos impactos todavía no es posible evaluar en su totalidad” (Ibidem, pp.106-107). Así en varios Estados (entre ellos en Guerrero y Oaxaca) se inició un proceso de autonomización de los municipios. En un marco en el cual “los sujetos titulares de los derechos indígenas son los pueblos indígenas y no los movimientos o las comunidades”, éstos han emprendido la defensa de los derechos comunitarios y el establecimiento de relaciones con otras comunidades y pueblos, apoyándose en el Congreso Nacional Indígena, como ámbito de discusión.

Es interesante observar que, a diferencia de Bolivia, donde los sentidos de la autonomía entraron en un campo de disputa con la oposición, a partir de la reapropiación que realizó la derecha de la llamada medialuna; en México ésta aparece como una prerrogativa absoluta de los pueblos indígenas, en su resistencia a las políticas de expropiación neoliberal llevadas a cabo por el gobierno. Asimismo, contrariamente a lo sucedido en Bolivia, donde la fragilidad del Estado nacional es una cuestión de origen y trayectoria histórica (suele hablarse de un “Estado fallido”), en México, el proceso de construcción del Estado nacional, conducido por el PRI (Partido Revolucionario Institucional) a lo largo del siglo XX, ha sido considerado como “exitoso”. Sin embargo, la apertura a la globalización asimétrica y los acuerdos comerciales celebrados con Estados Unidos, implicaron un trastocamiento de las relaciones sociales y una reorientación de la estructura estatal priista (Gilly: 2000). Así, no es casual que uno de los aspectos más

notorios que sobresale en el discurso de los diferentes actores es, como ya lo subrayaba el zapatismo, la crítica a la clase política, “incapaz de reconstruir el Estado nacional”. Es en ese marco específico, como afirma R. Gutiérrez (:2006), que los reclamos de los pueblos indígenas se harán bajo la consigna de la dignidad y la autonomía.

En suma, en México, el avance de las autonomías locales va revelando progresivamente un modelo de construcción del poder, en contraposición a la estatalidad y el “mal gobierno”, representada por el PRI y el PAN. Así Bárcenas destaca que “con la decisión de construir autonomía los pueblos indígenas buscan *dispersar el poder*, para posibilitar el ejercicio directo de las comunidades indígenas”; una descentralización diferente a la propuesta por los expertos del Banco Mundial desde los años `80. Elección y rotación de autoridades según los usos y costumbres, gestión comunitaria de la educación, en algunos casos, como en Guerrero, policía comunitaria, son aspectos que cubre el proceso de construcción cotidiana de la autonomía. Luchas locales que progresivamente enfrentan problemas nacionales en el marco de la globalización: la lucha por la tierra y el territorio (soberanía alimentaria, lucha contra la privatización de la energía eléctrica, el petróleo y los recursos naturales). Así, la autonomía es un proceso en construcción, cuyo alcance todavía no puede ser evaluado en su impacto y magnitud, aún si varios autores señalan que ésta designa un proceso de lucha que parece no tener retorno.

Otro de los ejemplos de reemergencia de la matriz comunitaria, en el marco de un gobierno neoliberal y fuertemente represivo, es el caso de Perú. Ya en 1999 surgió la Coordinadora Nacional de las Comunidades del Perú Afectados por la Minería (Conacami), que articula comunidades y organizaciones de nueve regiones del país. Aunque el proceso de instalación ha sido difícil –debido tanto a la judicialización y represión de las luchas-, la Conacami ha logrado colocar en la discusión pública la problemática de las consecuencias de la megaminería transnacional. Más aún, ciertos autores consideran que la Conacami ha ido realizando el pasaje de un lenguaje “ambientalista”, a la reafirmación de una identidad indígena y la defensa de los derechos culturales y territoriales (R.Hoetmer et all: 2008), en muchos casos, con un lenguaje más cercano al de las organizaciones campesino-indígenas de Bolivia. Sin embargo, no fue la Conacami ni las luchas contra la megaminería a cielo abierto, localizadas en las zonas de la sierra, las que pusieron al desnudo el carácter excluyente del modelo de desarrollo, sino aquellas otras, provenientes de la Amazonía peruana, lideradas por AIDSESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana).

Recordemos que el 5 de junio de 2009, Día mundial del Ambiente, comunidades indígenas de la Amazonía peruana, que llevaban a cabo una protesta desde hacía casi dos meses en contra de una batería de decretos legislativos que atentaban contra la Amazonía, fueron reprimidas por orden del gobierno de Alan García, en la provincia de Bagua, a unos mil kilómetros de Lima, en la frontera con Ecuador. La ola de protesta —a nivel nacional e internacional— que desencadenaron estos hechos, obligaron a García a dar marcha atrás a dos de los decretos legislativos cuestionados por las comunidades amazónicas. Así, luego de la masacre de Bagua, el gobierno peruano debió abrir la agenda nacional al reclamo del derecho de consulta por parte de las comunidades amazónicas. Un año después (mayo de 2010) el Parlamento peruano votó una ley de consulta previa, en acuerdo con la legislación internacional, la cual fue vetada por el presidente, quien realizó numerosas “observaciones”. Los puntos cuestionados se referían tanto al carácter vinculante de la consulta, como a su extensión, puesto que el presidente se oponía a que la misma incluyera a los pueblos campesinos de los Andes.¹² De este modo, el veto presidencial confirmaba una vez más el avance del modelo de desposesión, avalado por la continua concesión de territorios indígenas para actividades extractivas (petróleo, minería, forestales) y megaproyectos de infraestructura (hidroeléctricas, carreteras). Sin embargo, en mayo de 2011, poco después del triunfo electoral de Ollanta Humala, la ley de consulta previa a los pueblos indígenas fue finalmente sancionada.¹³

Asimismo, cabe agregar que la discusión acerca del alcance del derecho de consulta no es exclusiva de Bolivia o el Perú. En Ecuador el convenio 169 de la OIT, fue ratificado por la Constitución en 1998, pero en la práctica no se cumple, y corre el riesgo de ser

¹² En junio de 2010, en una carta de 8 páginas, A. García propuso cambiar el segundo párrafo del artículo 15 del proyecto que señalaba el carácter obligatorio de los acuerdos y el deber del Estado, en caso de que no se lograra un acuerdo, de adoptar las medidas necesarias para salvaguardar los derechos colectivos de los pueblos indígenas, al tiempo que cuestionaba la inclusión de las comunidades campesinas de la sierra y la costa.

¹³ Como afirma Clavero (2011), “El trabajo de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología no ha sido en vano. En la ley definitiva se ha incluido la expresión de *consentimiento* como finalidad de la consulta y suprimido el término de *veto* como posibilidad denegada a la parte indígena. Queda claro que los acuerdos vinculan, siendo exigibles en su caso por vía judicial. Está también sentada inequívocamente, desde el propio título, el carácter *previo* de la consulta. Sólo el Estado, y no las empresas, es quien debe efectuar la consulta. En fin, aunque así no se diga, estamos ante el principio de *consentimiento previo, libre e informado* que permitirá tener en cuenta la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas por vía de interpretación además del Convenio 169 de la OIT, éste por vía de mandato legislativo explícito. Con un gobierno que actúe de buena fe según los términos de la propia ley, ésta puede ser un buen instrumento”.

acotado y reformulado bajo otras figuras, como por ejemplo, la consulta pre-legislativa, o bien a través del desconocimiento de los canales regulares de la consulta, que supone el reconocimiento de las instituciones representativas de los pueblos indígenas. Otro elemento destacable en el caso ecuatoriano es la actual criminalización de las luchas socioambientales, bajo la figura de “sabotaje y terrorismo”, que alcanza a unas 180 personas, sobre todo ligadas a las resistencias contra la expansión de la megaminería.¹⁴ Las declaraciones de Correa acerca del “ecologismo infantil” de las organizaciones, no han coadyuvado al diálogo, en un escenario de confrontación abierta entre organizaciones indígenas y sociales y gobierno.

Por último, bueno es recordar que el avance de los pueblos indígenas en su lucha por la autonomía y el reconocimiento de los derechos colectivos incluye otras experiencias, movimientos y organizaciones que tienen lugar actualmente en Colombia, Chile y Guatemala, entre otros países.

Las nuevas formas de militancia y la demanda de autonomía

En segundo lugar, aunque en otro registro diferente del anterior, la demanda de autonomía recorre también otras formas de resistencia. Ya hemos adelantado que la demanda de autonomía da cuenta de una transformación importante en el proceso global de construcción de las subjetividades políticas, como resultado de los cambios que ha habido en la sociedad contemporánea. Ciertamente es que no hay que caer en la tentación metonímica y confundir la parte con el todo, pero resulta claro que la demanda de autonomía aparece como uno de los rasgos más salientes del campo contestatario. Más aún, para el caso latinoamericano, la conjunción entre anclaje territorial, acción directa, difusión de modelos assemblearios y demanda de autonomía, han ido configurando un nuevo *ethos militante*, esto es, un conjunto de orientaciones políticas e ideológicas que configuran la acción colectiva y se expresan a través de modelos de militancia, tales como el militante territorial y el activista cultural.

El nuevo *ethos militante* genera en la praxis cruces y yuxtaposiciones, pero también nuevas fronteras entre los modelos de acción y sus expresiones organizativas. En realidad, diferentes pero también complementarios, el militante social territorial y el activista cultural no siempre se encuentran en el largo camino de las luchas. Así, a diferencia de otras

¹⁴ Recordemos que en 2008, la Asamblea Constituyente reunida en Montecristi había amnistiado a unas 700 personas procesadas.

décadas, el activista cultural es particularmente celoso de su autonomía, y aún no está claro si la mayor distancia o la articulación con los movimientos sociales es sólo un problema de dinamismo socio-político, de potencialidad intrínseca o de particulares diferencias en términos de horizonte de expectativas.

Un caso de articulación ha sido sin duda ilustrado por el zapatismo. En efecto, en un contexto de globalización asimétrica, que colocó a los pueblos indígenas en la vanguardia de la lucha por la tierra y el territorio, el zapatismo inauguró una “modernidad no excluyente” (Ceceña:2004). Como ya hemos señalado, su irrupción fue no sólo importante en el marco del ascenso de los movimientos indígenas latinoamericanos, sino también en el proceso de renovación de las izquierdas. Más allá de las valoraciones que hagamos, el zapatismo conllevó una reformulación del horizonte de las izquierdas latinoamericanas, en un movimiento que lo colocó claramente, a través del discurso de Marcos, a contracorriente de las visiones vanguardistas del poder; diferenciándolo de las izquierdas vernáculas y conectándolo con el nuevo ethos epocal, ilustrado de modo paradigmático por la narrativa autonomista. Este doble movimiento fue dotando al zapatismo de una gran capacidad de atracción e irradiación, sintetizada por un lado, por la poderosa interpelación específica (hacia los pueblos indígenas), que sin embargo estaba lejos de declinarse en términos de un neofundamentalismo étnico o de un repliegue identitario; por otro lado, por la forma de concebir la política “desde abajo”, que reclamaba como valores estructurantes la autonomía, la horizontalidad de los lazos y la democracia por consenso; valores compartidos con los nuevos movimientos sociales surgidos en los años ´60. Sin duda, la noción de autodeterminación fue la llave que unió estas dos dimensiones de la autonomía, provenientes de experiencias tan diversas. El zapatismo tuvo así dimensiones que lo han hecho único, tanto por su capacidad para tender puentes interclasistas, intergeneracionales e internacionales, como por su persistencia y dinamismo a lo largo de un proceso conflictivo en el cual se han ido alternando de manera singular, el silencio y la palabra. Asimismo en México, el rol de los colectivos culturales (por ejemplo, como potenciales articuladores de la fallida *La Otra Campaña*) ha sido también destacable.

Bien diferente es el caso de la Argentina. Recordemos que en dicho país, la presencia de la matriz comunitaria, a través de las organizaciones indígenas, es marginal; por ende, la autonomía es un reclamo disociado de esta poderosa corriente latinoamericana (y su expresión en términos de proyecto político). En este sentido, pese a que en el campo

de los movimientos sociales, la narrativa autonomista se nutre de un discurso práctico,¹⁵ antes que teórico, cabe señalar la fuerte resonancia que en el campo cultural han tenido teóricos como Deleuze, la filosofía política italiana (Toni Negri y Paolo Virno), así como algunos textos de Holloway. A nivel continental, el modelo de referencia ha sido sin duda la experiencia y el discurso zapatista, más allá de las entusiastas adhesiones que produjo la experiencia boliviana en los últimos años.

La nueva narrativa presentaba antecedentes tanto en el campo de las organizaciones de derechos humanos (como en la agrupación HIJOS), así como en el de las organizaciones de desocupados. Pero es a partir de la crisis de 2001 que el tejido social organizativo mostró cambios ostensibles, lo cual se expresó en la expansión de un ethos militante autonomista, con fuerte formato territorial y aspiraciones de democratización. Rápidamente, una nueva generación militante, la de 2001, se iría consolidando, articulada sobre la territorialidad, el activismo asambleario, la demanda de autonomía y la horizontalidad de los lazos políticos. Un ritual de viaje los unía en todo el país: el recorrido territorial que iba del centro de la ciudad hacia la periferia, en especial, aquellos que iban hacia los lugares más pobres del Conurbano Bonaerense. El desafío tenía como corolario la necesidad de la construcción “desde abajo” y la exigencia de la articulación entre política y ética. Pero si entre 2001 y 2002 este nuevo ethos militante tuvo expresiones hiperbólicas (visibles en las críticas a la izquierda clasista y la impugnación de todo intento de construir una contrahegemonía desde el Estado), a partir de 2003, fue tomando rumbos más autocríticos y menos exacerbados, difundiéndose en otros espacios organizacionales, entre ellos, en los numerosos colectivos culturales que comenzaron a desplegarse en el campo de la documentación (video-activismo), el periodismo alternativo, la educación popular, entre otros. Se expresó incluso en el sindicalismo de base, que comenzó a manifestarse a partir de 2003/2004, con el mejoramiento de los índices económicos, y en el marco de la profundización de la precariedad. Surgieron así nuevas camadas de jóvenes delegados sindicales que luego de tantos años de aparente inmovilidad y descreimiento en las organizaciones sindical, habían revalorizado la acción gremial como herramienta de lucha. Estos eran en gran parte tributarios de ese ethos libertario, partidario de la acción radical, más proclives a las alianzas con otras izquierdas.

Posteriormente, la nueva subjetividad militante anclada en la defensa de la autonomía, se haría presente también en las asambleas de vecinos autoconvocados contra

¹⁵ Como afirma M.Bergel (:2008), “un rasgo que configura una de las especificidades de los autónomos argentinos: el reconocimiento de la superioridad epistemológica y política del momento práctico, y el celo por la irreductible singularidad de cada experiencia”.

la megaminería a cielo abierto. La primera de ellas, en Esquel, en la provincia patagónica de Chubut, había nacido en 2002, en pleno fervor asambleario. A partir de 2004, las asambleas ciudadanas se irían multiplicando a lo largo de quince provincias, amenazadas por la expansión vertiginosa de la minería trasnacional. En este sentido, no es exagerado afirmar que estas asambleas, de carácter policlasista, pero con un protagonismo de las clases medias, son las fieles herederas de ese ethos militante forjado en 2001. En 2006 surgió la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), espacio autonomista en el cual convergen las diferentes asambleas de base, que combina nuevos temas y repertorios de acción, con el rechazo, muchas veces extremo, a la delegación, lo cual suele conspirar contra la posibilidad de consolidar dicha instancia de segundo grado, en función de una lógica de acumulación política. De este modo, pese al claro retorno de lo nacional-popular en clave peronista, a partir del gobierno de N. Kirchner (2003), la emergencia de una nueva generación –la de 2001, tendió a abarcar un registro amplio de organizaciones, desde los desocupados, expresiones organizativas de clase media, nuevos delegados sindicales y asambleas contra la minería trasnacional.

Asimismo, en el actual escenario argentino, tanto el militante social como el activista cultural, enfrentan hoy obstáculos diferentes. En cuanto al militante social, referenciado en la defensa de la autonomía, una de las mayores dificultades es la de politizar lo social en el marco de un “cierre” del peronismo desde abajo, en un momento de exacerbación de lo nacional-popular. La crisis de las organizaciones de desocupados no es ajena al estallido de esta tensión, por encima del posterior mejoramiento de la situación económica, a partir de 2004. En cuanto a los militantes o activistas culturales, éstos han contribuido de manera decisiva a recrear los sentidos de las movilizaciones, sobre todo a partir del año 2002, aun si en el presente no tienen la visibilidad de los años anteriores-. En efecto, en la actualidad el lazo con los movimientos sociales aparece debilitado o, por el contrario, cuando éste existe, el activista cultural tiende a encapsularse en el espacio militante.¹⁶

En suma, mientras que en el caso de México o Bolivia este nuevo talante epocal presenta diversas modalidades de conjunción con la matriz indigenista, en Argentina ésta se nutre de la tensión con la izquierda clasista tradicional así como de las expresiones nacional-popular (hoy nuevamente conectadas al Partido Justicialista), instalando una tensión entre la afirmación de la autonomía como horizonte político emancipatorio y la

¹⁶ Una situación opuesta es la de Brasil, donde el Movimiento de los Trabajadores sin Techo trabajaba hasta hace poco tiempo codo a codo con activistas culturales (la llamada *guerrilla cultural*), durante las ocupaciones de tierras urbanas.

autonomía como valor refugio. Tanto las asambleas barriales que proliferaron durante 2002, como en la actualidad la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que nuclea unas setenta organizaciones de base que luchan contra la megaminería a cielo abierto y los agronegocios, ilustran el segundo caso (la autonomía como valor refugio), y visibilizan las dificultades que en términos de construcción política enfrenta esta nueva cultura militante .

Por otra parte, en Bolivia, la emergencia de un nuevo activismo cultural tuvo su momento de inflexión con la masacre del llamado “Octubre negro”, en 2003, que terminó con la renuncia del entonces presidente Sanchez de Lozada y erigió a la ciudad de El Alto como símbolo de la resistencia. Ciertamente, aquellos sucesos plantearon la necesidad de repensar la historia, en un contexto de intensificación de las luchas y, más aún, reflexionar sobre la identidad étnica de la ciudad, identificada con lo aymara. A través del teatro, la música y la plástica, diferentes artistas y colectivos culturales asumieron la tarea de evocar a las víctimas de Octubre 2003 (más de 60 muertos de El Alto), exigiendo justicia y reparación.¹⁷ Así, tanto en El Alto como en La Paz existen una multiplicidad de expresiones artísticas, desde el teatro, la música, las artes plásticas, así como numerosos colectivos y organizaciones culturales atravesados por una fuerte narrativa descolonizadora. Entre las experiencias más emblemáticas se encuentra la *Casa Juvenil de las Culturas Wayna Tambo*, que en aymara significa “encuentro de jóvenes”, nacida en 1995, la cual aparece como un espacio cultural alternativo de gran resonancia, capaz de combinar un enfoque centrado en la matriz andino-aymara con el fortalecimiento de la diversidad cultural (feministas, jóvenes, etc). Allí nació también una de las primeras expresiones del rap aymara, el hip hop, que en su modalidad boliviana es capaz de mezclar el sonido de los pututus (cuernos de toro), con flautas y tambores andinos, así como de rimar el castellano con el aymara. Otro ejemplo es el de *Mujeres Creando*, un colectivo anarquista y feminista muy creativo y provocador que utiliza el *grafitti*, haciendo de la calle su escenario principal. Estas mujeres, que se consideran como “agitadoras callejeras” defienden abiertamente la diversidad sexual (“*indias, putas y lesbianas, juntas, revueltas y hermanadas*”). Dos de sus

¹⁷ Obras de teatro como “Pacto Telúrico”, donde convergieron diferentes grupos de artistas y músicos, o discos como “Canto Encuentro”, en homenaje a las víctimas de El Alto, realizado por Radio Wayna Tambo y Radio Pachamama (del Centro Cultural Gregoria Apaza), y la propia Fejuve (Federación de Juntas Vecinales de El Alto), son ejemplos de la emergencia de un nuevo protagonismo cultural y político, donde la reivindicación étnica buscó tender puentes entre la memoria larga de las luchas indígenas y la memoria corta (la guerra del agua y la guerra del gas), estableciendo, a través de ese mismo movimiento, a El Alto como la gran ciudad-símbolo de la resistencia. Luego de realizar una investigación sobre el tema en 2010, hemos abordado parcialmente el tema en Svampa, 2011.

fundadoras, María Galindo y Julieta Paredes (ésta última presente hoy en *Mujeres Creando Comunidad*), cuentan con un reconocimiento en el espacio de las organizaciones autónomas a nivel global.

No obstante la multiplicidad de grupos culturales, bajo el gobierno de Evo Morales se ha venido dando una situación paradójica. Más allá de los apoyos visibles al proceso abierto en 2006, los colectivos culturales continúan discurriendo por caminos paralelos y no son pocas las organizaciones que consideran que el discurso descolonizador del gobierno se apoya en una visión folklorizada de lo étnico y en un concepto de cultura meramente instrumental, algo que además se torna visible en la ausencia de políticas públicas en el plano de la cultura, así como en la falta de voluntad del gobierno por promover un relato histórico-político de carácter más contrahegemónico

La actualización de la tradición nacional-popular

En tercer lugar, la desnaturalización de la relación entre globalización y neoliberalismo, nos inserta en un escenario transicional en el cual una de las notas mayores es la reactivación de la matriz nacional-popular, ligada a la reivindicación del Estado (como constructor de la nación); a un ejercicio de la política que instala una permanente contradicción entre dos polos antagónicos y, por último, a la centralidad de la figura del líder.¹⁸ En este registro podemos aludir a la actual experiencia de Bolivia y Argentina. Ciertamente, los avatares de lo nacional-popular conocen en ambos países caminos y expresiones diferentes. Mientras que en términos históricos en Bolivia lo nacional-popular, como conformación de una voluntad colectiva que instala una ruptura política, pareciera ser un legado plural (o en todo caso, remite a diferentes matrices político-ideológicas en el

¹⁸ Recordemos, sin embargo, que lo “nacional-popular” es una categoría que reenvía a elaboraciones de Antonio Gramsci, que aparecen en los *Cuadernos de la Cárcel*, definida como “voluntad colectiva” y asociada a la “reforma intelectual y moral”, ambas vistas como condiciones de posibilidad de un cambio histórico, a través de un proceso de construcción de hegemonía. En nuestros análisis, retomamos en parte los aportes de De Ipola y Portantiero (1994) -publicados originariamente en 1986- respecto de su inflexión en América Latina, ligada a la alternativa populista. Para estos autores, el doble proceso que propone el populismo (constitución del pueblo y construcción de un orden estatal) requiere la inclusión de tres niveles de análisis: el de las demandas y tradiciones nacional-populares, el del populismo como movimiento de nacionalización y ciudadanía de las masas, y el populismo como forma particular del compromiso estatal. En este marco, nos interesa hacer énfasis en la tradición nacional-popular y sus sucesivas configuraciones.

marco del proceso de construcción de la nación); en Argentina la tradición peronista ha naturalizado un sentido más estrecho, ligado al cuasi monopolio o captura de lo nacional popular por parte del Movimiento Justicialista, más allá de la heterogeneidad evidente de las figuras de lo popular, sobre todo a partir de 1980 y muy especialmente durante los `90, cuando el propio Partido Justicialista realizó un fuerte giro neoliberal.¹⁹

Ahora bien, en Bolivia la heterogeneidad de las apelaciones de lo nacional-popular es visible en tres niveles. En primer lugar, en términos de memoria mediana, la narrativa nacional-popular remite, sin duda, a la experiencia de “cogobierno” entre el MNR y la COB, en un primer momento del ciclo del nacionalismo revolucionario, entre 1952 y 1964. Como sostiene Luis Tapia (2007), la relación entre identidad indígena y tradición nacional-popular nunca ha sido fácil ni unívoca, pero esta experiencia de rebelión, ilustrada por el cogobierno MNR-COB “queda como parte del proyecto político” que atraviesa y alcanza el actual ciclo de rebelión. Los sindicatos cocaleros, de donde surge a la política Evo Morales, son en gran medida herederos de esta tradición, junto con ciertas inercias y reinenciones de lógicas comunitarias que, como ya hemos señalado, perviven bajo la “forma sindicato”. En segundo lugar, en términos de memoria corta, la interpelación nacional-popular está directamente ligada al escenario del conflicto configurado en la zona del Chapare, en la cual el movimiento cocalero debió confrontar no sólo con las diferentes gestiones gubernamentales sino también con la política de los Estados Unidos en la región. En efecto, entre los cocaleros, las medidas de erradicación violenta de la hoja de coca, dirigidas en los años 90 por los Estados Unidos, favorecieron la consolidación de una fuerte dimensión antiimperialista (más precisamente, antinorteamericana) de su acción política. En este marco, ante la existencia de un adversario externo poderoso, el discurso antiimperialista ha sido constitutivo de la identidad del movimiento cocalero. En razón de ello, no es casual que la acción y el discurso de Evo Morales se inserten en una perspectiva política pragmática, pero integradora y multidimensional, donde conviven lógica antiimperialista —Nación contra Imperio— y llamado nacional popular —pueblo contra oligarquías— con una afirmación de las naciones indígenas en tanto pueblos que deben ser reconocidos en su dignidad y con derechos plenos. Por último, ya desde el gobierno, el proyecto boliviano fue adoptando una fuerte orientación estatista. El vicepresidente Álvaro García Linera ha destacado la intervención del Estado no sólo como agente

¹⁹ Mientras que en Argentina la continuidad de lo nacional-popular ha sido asegurada a través de su identificación con el Partido Justicialista, de tipo obrerista, centrado en la figura del líder como clave de bóveda del modelo; en Bolivia, lo nacional-popular ha encontrado expresiones más heterogéneas (lo obrero-campesino), y su concepción es, por ende, más amplia, en la medida en que desborda la historia de un determinado partido político.

regulador sino también como activo productor de bienes y servicios. Según sus palabras, “el nuevo núcleo de poder es el Estado junto a la unidad productiva micro, pequeña y mediana, privada y comunitaria, urbana y rural, considerada la promotora del desarrollo nacional y la principal generadora de empleo”.

Sin embargo, como ya hemos señalado, la actualización de los contenidos más tradicionales de lo nacional-popular, instala a Bolivia en un escenario de tensión, frente a la exigencia de creación del Estado plurinacional. En efecto, con todas las innovaciones que supone, la Nueva Constitución política vino a confirmar el rol central del Estado, lo cual genera sin duda tensiones en el interior del proyecto de descolonización. Como sostiene Raúl Prada, “la propia cuarta parte de la Constitución, dedicada a la organización económica, plantea tensiones fuertes. Habla de una economía plural pero a la vez sostiene el fortalecimiento del Estado; el Estado es el articulador de las distintas formas de organización económica; el Estado se hace cargo de toda la cadena productiva, de la industrialización de los recursos naturales, del apoyo a la pequeña y la microempresa. El Estado se convierte en el promotor de la economía plural, con lo cual hay una tensión entre el pluralismo económico y una visión estatalista” (Svampa, 2010). Por otro lado, la consolidación del liderazgo presidencialista de Evo Morales, tiende a limitar el tipo de construcción política plural, sobre todo en lo que respecta al vínculo, muchas veces asimétrico, con los movimientos y organizaciones sociales; algo que comenzó a manifestarse durante el desarrollo de la Asamblea Constituyente y se puso en evidencia posteriormente, luego de la derrota política de las oligarquías regionales y el proceso de consolidación del MAS como partido hegemónico. Por encima de sus complejidades y riquezas, el estilo de liderazgo y las formas de concentración del poder, tienden a colocar al gobierno de Evo Morales en los canales más tradicionales del modelo de la “participación controlada” bajo el tutelaje estatal y la figura del líder, que en la figura del cogobierno con los movimientos sociales.

Por otro lado, la Argentina actual también da cuenta del retorno de la matriz nacional popular. Sin embargo, el devenir nacional-popular del kichnerismo fue paulatino. Durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), los movimientos tácticos en busca de una identidad progresista se articularon sobre dos ejes mayores: la reivindicación de los derechos humanos como política de Estado y el latinoamericanismo. También hubo un intento de construcción de una fuerza transversal progresista. Esta última tentativa, más bien errática y prontamente descartada, otorgaba un lugar a las organizaciones piqueteras deudoras de la matriz nacional-popular, que se integraron al gobierno bajo el nombre

políticamente correcto de “organizaciones sociales” (Barrios de Pie, Movimiento Evita y Federación de Tierras y Viviendas). No obstante, en términos de figuras militantes, estas fuerzas no fueron capaces de generar una épica alternativa a la que presentaba la generación de 2001, nutrida en el ethos autonomista y la matriz clasista. Desde nuestra perspectiva, mucho tuvo que ver el rechazo y estigma que medios hegemónicos, clases medias y el propio gobierno habían contribuido a instalar, durante la fuerte puja que se llevó a cabo en el espacio público entre 2003 y 2004 con las organizaciones piqueteras opositoras. Pero lo cierto es que ni la reivindicación de las luchas antineoliberales de la década del 90, ni la evocación de un ethos setentista alcanzaron para dotar de legitimidad a un actor social que en definitiva continuaba siendo visto por una gran parte de la sociedad como “clase peligrosa”, “lumpenproletariado residual” o simplemente, como una expresión del clientelismo de izquierda, amparado por el nuevo gobierno.

En realidad, ya en su primera etapa, el kirchnerismo optó por apoyarse sobre los sectores sindicales tradicionales. En 2004 la CGT se unificó bajo el liderazgo de Hugo Moyano, jefe del sindicato de los camioneros, quien durante los años 90 encabezó el MTA (Movimiento de Trabajadores Argentinos), nucleamiento sindical peronista donde conviven las apelaciones a la tradición nacional-popular con un sindicalismo de corte empresarial.

Finalmente, el conflicto que el gobierno de Cristina F. de Kirchner, apenas asumido, tuvo con los productores agrarios, en 2008, fue la piedra de toque para actualizar de manera plena el legado nacional-popular. La dinámica virulenta que adquirió el conflicto económico hizo que éste adoptara claras dimensiones políticas: tanto la respuesta inflexible del gobierno (llamándolos “piquetes de la abundancia”) como la rápida reacción de sectores de clase media porteña, que salieron a la calle a apoyar a los sectores agrarios, cuestionando el estilo político autoritario del gobierno, sirvieron para reactualizar viejos esquemas de carácter binario, que atraviesan la historia argentina y han anclado fuertemente en la tradición nacional-popular: Civilización o Barbarie; Peronismo o Antiperonismo; Pueblo y Antipueblo. No importa ya si el gobierno mostró escasa flexibilidad para negociar con las diferentes partes, cimentando de este modo el carácter monolítico del bloque opositor, o si las clases medias volvieron a manifestar inveterados prejuicios racistas y clasistas en relación a las bases populares peronistas. El conflicto fue un parteaguas: en ese marco, el gobierno logró la adhesión activa de un grupo amplio de intelectuales y académicos de corte progresista, *Carta Abierta*, quienes salieron en defensa de la institucionalidad y realizaron una lectura de las movilizaciones agrarias en términos de “conflicto destituyente”. Meses después, el gobierno recobró iniciativa y el esquema binario de lectura

se reforzó notoriamente con el conflicto generado por la ley de medios, que esta vez lo enfrentó directamente con el multimedio Clarín (quien, hasta antes de la disputa con los sectores agrarios, había sido beneficiado por las políticas del kirchnerismo). Los debates en torno de la nueva ley audiovisual, en 2009, suscitaron también la adhesión entusiasta de numerosos periodistas, artistas y sectores educativos, que hasta ese momento habían mantenido más bien una relación de apoyo tácito o de consenso pasivo en relación al kirchnerismo.

La muerte repentina de Néstor Kirchner terminó de abrir por completo las compuertas a lo nacional-popular en su clásica versión estatista. Este fenómeno conllevó dos consecuencias mayores: por un lado, consolidó el discurso binario como “gran relato” refundador del kirchnerismo, sintetizado en la oposición entre un bloque popular y sectores de poder concentrados (monopolios, corporaciones, gorilas, antiperonistas). Como en otras épocas de la historia argentina, los esquemas dicotómicos, que comenzaron siendo principios reductores de la complejidad en un momento de conflicto, terminaron por funcionar como una estructura de inteligibilidad de la realidad política. Por otro lado, amplió el arco de alianzas, a partir de la incorporación explícita de la juventud —que había tenido notoria presencia en las exequias de Kirchner—. Agrupaciones pequeñas como “La Cántora” (fundada por el hijo del matrimonio Kirchner) tuvieron un enorme crecimiento, y otras similares comenzaron a multiplicarse por todo el país, al compás de una doble militancia: tanto desde altos puestos del aparato del Estado como desde las bases, marcadas por un activismo virtual antes que territorial, desde blogs, twitters y redes sociales.

Como consecuencia de ello, Argentina comenzó a transitar un escenario de polarización político-social, comparable al de otros países latinoamericanos (como es el caso Venezuela). Sin embargo, el modelo kirchnerista presenta numerosos elementos tradicionales (la alianza con los sectores más empresariales del sindicalismo, los intendentes del Conurbano Bonaerense y gobernadores que responden a una fuerte matriz autoritaria), vinculados al legado organizacional del Partido Peronista, al tiempo que, a diferencia de las experiencias de Bolivia, Venezuela y Ecuador, aparece muy despreocupado por la tarea de refundación de las instituciones (y por ende, de las aspiraciones de democratización de numerosos sectores subalternos), que estos gobiernos encararon a través de los procesos de reforma constitucional. Esta inflexión no es solo el resultado de una relación histórica o de un vínculo perdurable entre partido peronista y organizaciones sociales, sino que responde a una cierta concepción del cambio social, bajo la figura, ya citada, del modelo de la participación controlada, tutelada por el líder.

Extractivismo e ilusión desarrollista

En no pocas ocasiones, la posibilidad de abrir un debate público sobre los antagonismos que se van gestando a partir de las nuevas dinámicas del capital, se encuentra obturada no sólo por razones económicas y políticas, sino también por obstáculos de tipo cultural y epistemológico, que se refieren a las creencias y representaciones sociales. Con ello, queremos subrayar la importancia que adquieren ciertos imaginarios y narrativas nacionales –y regionales- acerca del desarrollo, íntimamente ligados a una determinada concepción acerca de la naturaleza americana.²⁰

Distintos autores han subrayado el carácter antropocéntrico de la visión dominante sobre la naturaleza, como “canasta de recursos” y a la vez como “capital” (Gudynas, 2002). Ahora bien, en América Latina, esta idea se vio potenciada por la creencia de que el continente es, para retomar al sociólogo boliviano R. Zavaletta, (2007) “*el locus por excelencia de los grandes recursos naturales*”. La “ventaja comparativa” de la región sería así su capacidad (histórica) para exportar Naturaleza.

Desde esta perspectiva, paisajes primarios, escenarios barrocos, en fin, extensiones infinitas, que tanto han obsesionado a viajeros y literatos de todas las épocas, van cobrando una nueva significación al interior de los diferentes ciclos económicos. Un ejemplo lo ofrece el actual boom minero, que alcanza a casi todos los países latinoamericanos. Así, la expansión de la minería a gran escala incluye las altas cumbres cordilleranas, donde se encuentran las cabeceras de importantes cuencas hídricas, hasta ayer inalcanzables, convertidas hoy en el objetivo de faraónicos proyectos (como el de Pascua Lama, el primer proyecto binacional del mundo, compartido por Chile y la Argentina; o los proyectos mineros en fase de exploración en la Cordillera del Cóndor, en Ecuador y Perú). Otro ejemplo emblemático es el “descubrimiento” de las virtudes del litio: hasta ayer, el Salar de Uyuni era tan sólo un paisaje primario, que hoy cobra una nueva significación ante la necesidad de desarrollar energías sustitutivas (automóviles eléctricos). De este modo, el nuevo paradigma biotecnológico termina por resignificar aquellos recursos naturales “no aprovechados” o territorios “improductivos”, insertándolos en un registro de valoración capitalista.

Volviendo a Zavaletta, éste afirmaba que la idea del subcontinente como locus por excelencia de los grandes recursos naturales, fue dando forma al *mito del excedente*, “uno de

²⁰ Al hablar de imaginarios o narrativas, estamos aludiendo a la construcción de un relato unificador, que reposa sobre ciertas marcas identitarias, mitos de origen, que van moldeando las representaciones colectivas acerca del presente y del futuro. Véase Baczko (1993).

los más fundantes y primigenios en América Latina”. Con ello, el autor boliviano hacía referencia al mito “eldoradista” que *“todo latinoamericano espera en su alma”*, ligado al súbito descubrimiento material (de un recurso o bien natural), que genera el excedente como “magia”, “que en la mayor parte de los casos no ha sido utilizado de manera equilibrada”. Hasta ahí Zavaletta, pues las preocupaciones del autor poco tenían que ver con la cuestión de la sustentabilidad ambiental, que hoy es tan importante en nuestras sociedades, sino más bien con aquella del “control del excedente” (tema sobre el cual volveremos más abajo). Sin embargo, resulta legítimo retomar a Zavaletta para pensar en el actual retorno de este mito fundante, de larga duración, *el excedente como magia*, ligado a la abundancia de los recursos naturales y sus ventajas, en el marco de un nuevo ciclo de acumulación.

El tema ha sido desarrollado por varios autores latinoamericanos, entre ellos, por F. Coronil (2002) quien escribió sobre el “Estado mágico” y la mentalidad rentista, aplicados al caso venezolano. Asimismo, emparentado con lo que se conoce como la “enfermedad holandesa”, el ecuatoriano A. Acosta (2009), ha reflexionado sobre la “maldición de la abundancia”, estableciendo la conexión entre paradigma extractivista y el empobrecimiento de las poblaciones, el aumento de las desigualdades, las distorsiones del aparato productivo y depredación de los bienes naturales. En una línea similar, pero apelando a la persistencia de ciertos imaginarios sociales, nuestra perspectiva subraya la importancia del mito primigenio del *excedente como magia*, que en el contexto actual alimenta la *ilusión desarrollista*, expresada en la idea de que, gracias a las oportunidades económicas actuales (el alza de los precios de las materias primas y la creciente demanda, proveniente sobre todo desde Asia), es posible acortar *rápidamente* la distancia con los países industrializados, a fin de alcanzar el desarrollo siempre prometido y nunca realizado de las sociedades latinoamericanas.

En términos de memoria corta, la ilusión desarrollista se conecta con la experiencia de la crisis; esto es, con el legado neoliberal de los `90, asociado al aumento de las desigualdades y la pobreza, así como también a la posibilidad de sortear -gracias a dichas ventajas comparativas-, las consecuencias de la actual crisis económica internacional. Así, el superávit fiscal y las altas tasas de crecimiento anual de los países latinoamericanos, ligados a la exportación de productos primarios, apuntalan un discurso triunfalista acerca de una “vía específicamente latinoamericana”, en donde se entremezclan sin distinción, continuidades y rupturas en lo político, lo social y lo económico. Por ejemplo, el final de “la larga noche neoliberal” (en la expresión del presidente ecuatoriano R. Correa) tiene un correlato político y económico, vinculado a la gran crisis de los primeros años del siglo

XXI (desempleo, reducción de oportunidades, migración en masa); tópico que aparece también en el discurso de los Kirchner en Argentina, con el objetivo de contraponer los indicadores económicos y sociales actuales, con los años neoliberales (los '90, bajo el ciclo neoliberal de C.Menem) y, sobre todo, con aquellos de la gran crisis que sacudió a la Argentina en 2001-2002, con el fin de la convertibilidad entre el peso y el dólar.

En resumen, existen una variedad de corrientes ambientalistas, pero uno de los problemas fundamentales para pensar la cuestión ambiental en América Latina y, en este caso, en Bolivia, no es solamente la variedad existente, sino la impronta de la ilusión desarrollista, más aún, la eficacia simbólica del imaginario desarrollista y la concepción de la Naturaleza que vehicula y su presente actualización, en un contexto de ventajas comparativas.

En esta coyuntura favorable, no son pocos los gobiernos latinoamericanos que han transitado del *Consenso de Washinton al Consenso de los Commodities*, relegando en un segundo plano o sencillamente escamoteando las discusiones acerca de los modelos de desarrollo posible, habilitando así el retorno en fuerza de una visión productivista del mismo. En este sentido, uno de los escenarios latinoamericanos más emblemáticos de la *ilusión desarrollista* y, al mismo tiempo, más paradójico, es el que presenta Bolivia. En efecto, en un contexto de vertiginoso aumento del precio de los *commodities*, dentro del cual las nacionalizaciones se tradujeron por la multiplicación de la renta ligada a las exportaciones primarias, a comienzos del segundo mandato, el gobierno de Evo Morales redobló las expectativas de abrir la economía a nuevas explotaciones. A comienzos del segundo mandato (2010), el vicepresidente A.García Linera hablaría del “gran salto industrial”, colocando el acento en una serie de megaproyectos estratégicos, que en realidad están basados en la expansión de las industrias extractivas (participación en las primeras etapas de explotación del litio, expansión de la megaminería a cielo abierto, en asociación con grandes compañías transnacionales, construcción de grandes represas hidroeléctricas y carreteras en el marco del IIRSA, entre otros).

El propio discurso de Evo Morales aparece atravesado por fuertes ambivalencias y contradicciones: hacia afuera, presenta una fuerte dimensión eco-territorial, sobre todo, a la hora de referirse a las consecuencias del cambio climático, o en sus apelaciones a la filosofía del “buen vivir”, pero hacia adentro, reafirma una práctica nacional-productivista. Pero, hacia adentro, el gobierno reafirma un discurso y una práctica nacional-productivistas que se hallan en continuidad con el paradigma extractivista, alentado por la apertura de nuevas oportunidades económicas (en un país donde la contracara es precisamente un imaginario

del despojo reiterado –de tierras y riquezas–). Como afirma Stefanoni (:2007), el Gobierno “promueve la utilización de las reservas de hidrocarburos y minerales para “industrializar el país” y emanciparlo de la condena histórica del capitalismo mundial a ser un mero exportador de materias primas, y, al mismo tiempo, deja entrever cierta nostalgia hacia un Estado de bienestar que para el caso boliviano fue extremadamente limitado.²¹

En este sentido, la centralidad que adquiere la temática del control de los recursos (sea bajo el control del Estado o de las naciones o pueblos originarios en sus territorios) acerca a la Bolivia actual aún más a la perspectiva nacional-popular, que enfatiza la problemática del despojo de los recursos naturales, pero tiende a escamotear o subalternizar la cuestión de los impactos ambientales.²² Por otro lado, no hay que olvidar que las mismas luchas sociales protagonizadas entre 2000 y 2005, colocaban el acento en el acceso y control de los recursos naturales, antes que en el cuidado o protección del ambiente. Como consecuencia de ello, el gobierno boliviano muestra serias dificultades para conceptualizar los conflictos socio-ambientales que se abren en función de consolidación de dicha matriz productiva y tiende a descalificar rápidamente los reclamos ambientales, asociándolos al accionar interesado de ONGS extranjeras o a supuestos agentes del imperialismo.

El cuadro actual da cuenta de diferentes movilizaciones, de carácter defensivo, que vienen llevando a cabo organizaciones pertenecientes al Pacto de Unidad, como CIDOB (Coordinadora Indígena del Oriente Boliviano) y CONAMAQ (Confederación Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo), las cuales han comenzado a exigir el respeto del derecho de consulta, recogido por la Constitución boliviana; el respeto por las estructuras orgánicas (y el rechazo a votaciones y pronunciamiento de autoridades originarias paralelas), así como “la coherencia entre el discurso de defensa de la Madre Tierra y la práctica extractivista del gobierno” (www.cidob-bo.org). Sin duda, el punto de inflexión de las organizaciones

²¹ “Las tres fronteras del gobierno de Evo Morales”, en *Bolivia: Memoria, Insurgencia y Movimientos Sociales*. compilación realizada por M. Svampa y P.Stefanoni, Editorial El Colectivo-Osal (Clacso), 2007.

²² No es casual que Evo Morales desarrolle una crítica unilateral respecto de la actual matriz productiva, expulsando la problemática ambiental hacia afuera, como si ésta fuera patrimonio y responsabilidad exclusiva de los países más ricos y desarrollados (en función de la deuda ecológica), y no involucrara en absoluto la dinámica económica adoptada por su propio gobierno. En este punto, hay varias cuestiones que ayudan a comprender el nudo de tales contradicciones. Una de ellas está vinculada a que el imaginario extractivista que presenta Bolivia está ligado a la figura del despojo reiterado –de tierras y riquezas–; esto es, a la imposibilidad de convertir el excedente, como afirmaba Zavaleta, en “materia estatal”. Esta obsesión explica que el tema central de la agenda del gobierno sea el control del excedente y no precisamente la discusión acerca de las consecuencias que pudiera conllevar la expansión de un determinado estilo de desarrollo, basado en el paradigma extractivista.

campesino-indígenas fue la realización de la Contracumbre en Cochabamba sobre el cambio climático (abril de 2010), que reunió en la mesa 18 (no autorizada por el gobierno), a aquellas organizaciones que propusieron debatir sobre la problemática ambiental en Bolivia. El primer gran episodio que ha dado cuenta de la existencia de fuertes tensiones y contradicciones al interior del proceso boliviano, ha sido la resistencia indígena frente a la construcción de una carretera que atravesaría un área protegida y un territorio indígena: el TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure). Más allá de la resolución que finalmente se adopte frente a este conflicto, el mismo abre a una nueva etapa en la cual se ha tornado visible la evidente tensión entre autonomías indígenas, reclamos ambientales y el desarrollo de proyectos extractivos.

Uno de los pocos países en los cuales se ha intentado llevar a cabo una discusión sobre el modelo extractivista exportador (respecto del petróleo y de la minería a gran escala) es Ecuador, lo cual se vio reflejado inicialmente a través de la composición del gabinete, dividido entre “extractivistas” y “ecologistas”²³. Sin embargo, el resultado no ha sido muy alentador. Ciertamente, luego de su asunción, el Gobierno de Correa elaboró y difundió un Plan Nacional de Desarrollo, que involucraba una concepción integral del mismo, esto es, no sólo en términos de lógica productiva y social, sino también el desarrollo entendido como “la consecución del buen vivir en armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas” (Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010:**55**). La elaboración del Plan incluyó mesas de discusión en las que participaron diferentes sectores de la sociedad ecuatoriana, así como un proceso arduo de sistematización y consensos sobre sus componentes.

Dentro del Gobierno de Correa, las posiciones ecologistas eran reflejadas por Alberto Acosta, quien fuera primero ministro de Energía y luego presidente de la Asamblea Constituyente.²⁴ La propia Asamblea planteó, en un momento determinado, declarar el Ecuador “libre de minería contaminante”. Los resultados, sin embargo, fueron otros: efectivamente la Asamblea Constituyente declaró en abril de 2008 la caducidad de miles de concesiones mineras presuntamente ilegales y puso en vilo millonarios proyectos extractivos, mientras se aprobaba un nuevo marco legal para ampliar el control estatal en la industria. En este sentido, como plantea Mario Unda (2008) “la reversión de las concesiones mineras debe entenderse como un mecanismo para obligar a las empresas

²³ F. Ramírez y A. Minteguiaga, “El nuevo tiempo del Estado. La política posneoliberal del correísmo”, en *Revista OSAL* 22, CLACSO, Buenos Aires, 2007.

²⁴ Acosta presentó su renuncia a mediados de 2008, en razón de sus desacuerdos con el presidente Correa.

mineras a renegociar bajo nuevas condiciones, dejando más recursos en el país, acogiendo reglamentaciones más claras y posiblemente una asociación con el Estado (para lo cual se plantea la creación de la Empresa Nacional de Minería)”. Finalmente, la nueva ley minera, aprobada en enero de 2009, perpetúa el modelo extractivista, desconociendo el derecho a la oposición y consulta de las poblaciones afectadas por la extracción de recursos naturales. Así, contrariando la expectativa de numerosas organizaciones sociales, el gobierno de Correa optó por un modelo neodesarrollista, minimizando el debate acerca de los gravosos efectos sociales y ambientales de las actividades extractivas.

Finalmente, para el caso argentino, en este punto, las propuestas del matrimonio presidencial, los Kirchner, han sido de corte claramente continuista. En realidad, el gobierno argentino ha reactivado la tradición nacional-popular recientemente (sobre todo luego del conflicto con los productores agrarios), al tiempo que confirma el desarrollo de una dinámica de desposesión, sobre todo en lo que respecta a las problemáticas ligadas a la tierra y el territorio. No por casualidad, en los últimos años se han multiplicado los conflictos vinculados a las políticas de mercantilización de las tierras, donde se mezclan fenómenos como la urbanización forzada con la concentración de la tierra, la expansión del agronegocio y la minería transnacional. Necesario es decir que estos conflictos revelan algo más que el costado “débil” del gobierno, como sostienen sus defensores: en realidad, estas políticas forman parte del sistema de dominación; son sostenidas y promovidas desde el aparato estatal y marcan la profundización de una lógica de desposesión, en una perturbadora continuidad con lo sucedido en los 90.

¿Es posible, sin embargo, esta coexistencia tan flagrante entre, por un lado, una política que se invoca como nacional-popular; y por el otro, la profundización de una dinámica de desposesión? Desde nuestra perspectiva, no es sólo una cuestión de tasas de crecimiento económico (esto es, de “éxito” económico del modelo). En realidad, una particularidad que afianza la construcción hegemónica en clave nacional-popular es que, en el campo de las luchas, la coexistencia actual entre modelos de desarrollo diferentes (industrial/servicios; agronegocio/minero) se expresa también a través de una gran desconexión: así, existen pocos puentes entre las actuales luchas sindicales y las disputas por la tierra y el territorio. Entre otros, uno de los factores que agrava la desconexión es la acentuación de una retórica nacional popular, acoplada con un imaginario desarrollista, lo cual potencia los rasgos corporativos de los sindicatos y acentúa la incomprensión hacia aquellos sectores que cuestionan los modelos minero y el de agronegocio. En este marco, no es casual que los sectores progresistas ligados al kirchnerismo tiendan a mantener

“blindado” el discurso frente al carácter nodal de estas problemáticas, negando la responsabilidad gubernamental respecto de la lógica de desposesión que caracteriza a determinadas políticas de Estado, y subrayan, en contraste, el peso de las políticas sociales y la revitalización de institutos laborales, como la negociación colectiva, entre otros.

Todo indica que, en los próximos años, la coexistencia entre dinámica nacional-popular y acentuación de la lógica de desposesión tenderá a agravarse, lo cual coloca a la Argentina en una situación por demás frágil y peligrosa. Cabe destacar que en el último año hubo 15 muertos por represión (entre junio de 2010 y julio de 2011), en gran parte ligados a conflictos por la tierra y la vivienda. En este sentido, si bien el gobierno de los Kirchner no utilizó la represión como “política de Estado”, no es menos cierto que ésta aparece hoy ampliamente federalizada. Más claro: son los gobiernos provinciales –muchos de ellos alineados con el oficialismo-, los que apelan a la represión a través de grupos especiales, policía provincial, patotas sindicales e incluso guardias privadas, contra aquellos que cuestionan una política de acaparamiento de tierras, y por ende, directa o indirectamente recusan la expansión de modelos productivos avalados y promovidos activamente por políticas nacionales.

En fin, en este escenario, y por encima de las diferencias nacionales, movimientos campesinos e indígenas, movimientos socio-ambientales urbanos, son arrojados a un campo de doble clivaje y asimetría. Por un lado, deben enfrentar directamente la acción global de las grandes empresas transnacionales, quienes en esta nueva etapa de acumulación del capital se han constituido en los actores hegemónicos del modelo extractivista, por otro lado, en el plano local, deben confrontar con las políticas de los gobiernos progresistas, quienes consideran que en la actual coyuntura internacional las actividades extractivas y los agronegocios constituyen la vía más rápida –sino la única en esas regiones- hacia un progreso y desarrollo, siempre trunco y tantas veces postergado en estas latitudes. La disputa da cuenta, por ende, no sólo de un continuado acoplamiento entre neodesarrollismo y neoliberalismo, sino también, una vez más, de la asociación entre neodesarrollismo y tradición nacional-popular.

* * *

El llamado a la diversidad o el reconocimiento de la diferencia como eje de las luchas sociales encuentra dos declinaciones fundamentales en América Latina: por un lado,

el proyecto de autonomía de los pueblos indígenas, expresado en un colosal desafío, el de crear un Estado Plurinacional; por el otro, el desarrollo de una narrativa autonómica, ligada a diferentes formas de activismo territorial y cultural. Claro está que el avance de las luchas indígenas da cuenta de una reivindicación específica ligada a la historia latinoamericana, mientras la narrativa autónoma forma más bien parte del nuevo talante epocal, está presente en gran parte de las sociedades contemporáneas, en tanto heredero de los llamados nuevos movimientos sociales, y directamente vinculado con la crisis de representación política y los procesos de desinstitucionalización de la sociedad contemporánea.

Sin embargo, en países como Bolivia, donde se ha expresado un proyecto político que apunta a la creación del Estado plurinacional, más allá de las dificultades internas, la hipótesis estatalista, de la mano de la actualización de lo nacional-popular, parece sobreponerse y colocar fuertes límites a aquella novedosa apuesta política. Asimismo, en diversos países donde ha habido un desarrollo importante de la narrativa autonómica vinculada al nuevo ethos militante, también se han erigido límites y debilitamientos, no sólo ante el endurecimiento de los dispositivos de disciplinamiento, sino también frente a la consolidación de diferentes experiencias políticas, articuladas con el legado nacional-popular, en su versión más canónica (fetichismo estatal y estructuras de sometimiento al líder).

Por último, el pasaje del Consenso de Washington al Consenso de los commodities ha ido afirmando un estilo de desarrollo extractivista que tiende a reconfigurar las economías, bajo nuevas formas de dependencia y una tendencia a la reprimarización, así como los territorios, bajo nuevas formas de dominación y violación de los derechos ambientales, territoriales, indígenas, lo cual interpela fuertemente al proceso de democratización en curso.

En suma, el cambio de época registrado en los últimos años en la región, a partir de la desnaturalización de la relación entre globalización y neoliberalismo, parece configurar un escenario transicional en el cual aquellas tendencias más innovadoras y disruptivas aparecen limitadas y absorbidas por el avance y (re)articulación de la tradición nacional-popular, sostenida a la vez por una fuerte estructura de liderazgo personalizado y un vertiginoso estilo de desarrollo extractivista.

Bibliografía citada

ALMEYRA, G. (2008), “Los vaivenes de los movimientos sociales en México”, Revista *OSAL*, nro 24, oct-de 2008

BACZKO, B. (1984), *Les imaginaires sociaux*, Paris: Payot, 1984 [trad. cast.: Buenos Aires: Nueva Visión, 1991

BERGEL, M. (2008), “En torno al autonomismo argentino”, en www.dariovive.org

-E.CECEÑA, A. BARTRA y A. GARCIA LINERA (2003), “A diez años del levantamiento zapatista” (dossier especial de *OSAL*, *Observatorio Social de América Latina*, año IV, nro 12, oct-dic.

-A.E.CECEÑA, P. AGUILAR y C.MOTTO (2007), *Territorialidad de la dominación*, IIRSA, Observatorio de Geopolítica, 62 p.

CORONIL, F (2002), *El Estado mágico. Naturaleza, dinero y modernidad en Venezuela*, Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Central de Venezuela – Nueva Sociedad, Venezuela, 2002,

DE IPOLA, E, y J.C.PORTANTIERO, (1994), “Lo nacional-popular y los nacionalismos realmente existentes”, en C.Vilas (comp.) *La democratización fundamental. El populismo en América Latina*, México, Consejo nacional para la cultura y las artes.

DIAZ POLANCO, A (2008), “La insoportable levedad de la autonomía”. La experiencia mexicana!, pp.245-273, en N. Gutierrez Chong, *Estados y Autonomías en democracias contemporáneas*, México, Plaza y Valdés.

-FUENTES MURUA; J (2006), *La Asamblea Constituyente, paso ineludible*. México, 1995-2006, en R.Gutiérrez y Escárzaga F., *Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo*, vol. II, Universidad Autónoma de Puebla.

-GORDILLO, M.J, (2000), *Campesinos revolucionarios en Bolivia. Identidad, territorio y sexualidad en el Valle Alto de Cochabamba, 1952-1964*. Edición PROMEC/ Universidad de la Cordillera/ plural editores/ CEP, la Paz.

-GILLY, A (1997), *Chiapas, la razón ardiente*, México, Era (selección de capítulos).

GUDYNAS, E - (2009) “Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo”, en AAVV, *Extractivismo, Política y Sociedad*, CAAP, CLAES., Quito.

-GUTIERREZ AGUILAR, R, (2006), “Dignidad como despliegue de soberanía social. Autonomía como fundamento de transformación”, en R.Gutiérrez y Escárzaga F., *Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo*, vol. II, Universidad Autónoma de Puebla.

- HARVEY, D. (2004), “El nuevo imperialismo: Acumulación por desposesión”, *Socialist Register*, bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/social/harvey.pdf

-KOSELLECK, R. (1993), *Futuro pasado: para una semántica de los tiempos históricos*, Ed. Paidós Ibérica 1993

LOPEZ y RIVAS, G. (2004), “La autonomía de los pueblos indios”, Ponencia para el Encuentro “Autonomía Multicultural en América Latina”, Lateinamerika-Institut, Viena Austria, 21 de octubre de 2004.

LOPEZ BARCENAS, F (2006), “Las autonomías en México. De las demandas a la constitución”, en R. Gutiérrez y Escárzaga F., *Movimiento indígena en América Latina: resistencia y proyecto alternativo, vol. II*, Universidad Autónoma de Puebla

MARTUCCELLI, D. y M. SVAMPA (1997), *La plaza vacía. Las transformaciones del peronismo*, Buenos Aires, Losada.

-MAC DONALD K., (2003), “De la solidarité a la fluidarité”, in *M. Wieworka, Un autre monde... Contestations, dérives et surprises dans l'antimondialisation, Paris, Balland*, pp-77-92.

MODONESSI, M (2008), “Derechas e izquierdas en México. La disputa por las calles”, en *Le monde diplomatique*, Bolivia, octubre de 2008.

OCHOA URIOSTE, Mauricio (2008) “La nueva Constitución y los estatutos autonómicos en Bolivia”, de OCHOA, en www.bolipress.com.

-PACTO DE UNIDAD (2006) Propuesta de las Organizaciones indígenas, Originarias, Campesinas, y de Colonizadores hacia la Asamblea Constituyente, recogido en *Bolivia: Memoria, Insurgencia y Movimientos Sociales*, M. Svampa y P. Stefanoni (comp.), Editorial El Colectivo-Osal (Clacso), 2007.

-PALACIOS PAEZ, M, PINTO, V. y HOETMER (2008), “Minería Transnacional, Comunidades y las Luchas por el Territorio en el Perú: El caso de Conacami”, Lima, mimeo.

SEOANE, J, E. TADDEI y C. ALGRANATI (2006), en “Movimientos sociales y neoliberalismo en América Latina”; en *Enciclopédia Contemporânea da América Latina*, Compiladores Emir Sader, Ivana Jinkings, Carlos Eduardo Martins y Rodrigo Nobile, Brasil, Boitempo.

SOUSA SANTOS, B., (2007) *Más allá de la gobernanza neoliberal: El Foro Social Mundial como legalidad y política cosmopolitas subalternas*. En Santos y Garavito (Eds) en “El derecho y la globalización desde abajo. Hacia una legalidad cosmopolita”; Mexico; Anthropos,

----- (2007b), “La reivención del Estado y el Estado plurinacional”, en *Revista Osal*, nro 22, Buenos Aires.

SVAMPA, M- (2008) *Cambio de Época. Movimientos sociales y poder político*. Buenos Aires, Siglo XXI-Clacso.

SVAMPA, M. y M. ANTONELLI, (2009) *Minería transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales*, Buenos Aires, Biblos.

SVAMPA, M, P.STEFANONI y B.FORNILLO (2010) *Debatir Bolivia. Perspectivas de un proyecto de descolonización*; Taurus.

SVAMPA, M (2011a) « Modelo de Desarrollo y cuestión ambiental en América Latina: categorías y escenarios en disputa », en I.Farah y F. Wanderley (comp.), *El desarrollo en cuestión. Reflexiones desde América Latina*, Ediciones de el Cides-UNSA y Plural Editores, La Paz, Bolivia, en prensa

------(2011b) "Art and Politics. Identity and the Art of Unbecoming a Colon" en *ReVista, the Harvard Review of Latin America* David Rockefeller Center for Latin American Studies, en prensa, 2011.

------(2011c), "Argentina, una década después. Del "que se vayan todos" a la exacerbación de lo nacional-popular" *Revista Nueva Sociedad*, nro 235

P.STEFANONI y H.DO ALTO (2006), *La revolución de Evo Morales*, Buenos Aires, clave para todos.

STEFANONI, P. (2007) "Las tres fronteras del gobierno de Evo Morales", en *Bolivia: Memoria, Insurgencia y Movimientos Sociales*, M. Svampa y P.Stefanoni (comp.), Editorial El Colectivo-Osal (Clacso).

TAPIA., Luis (2008), *Política salvaje*, CLACSO-Muela del Diablo-Comuna, La Paz.

ZAVALETTA MERCADO, René, (2009), *Lo nacional-popular en Bolivia*, La Paz, Plural. 1ra edición, 1986.